**JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
ARMENIA QUINDÍO**

Asunto:	Sentencia de primera instancia
Demandante:	Sendy Daney Villa Arango
Demandado:	Oscar Alonso Ramírez Sierra y/o
Proceso:	Verbal – Responsabilidad Civil Contractual
Radicado:	63001-31-03-003-2020-00058-00

Abril cinco (05) de dos mil veintidós (2022)

Concluido el trámite de la instancia sin que se observen causales de nulidad, procede el Despacho a proferir sentencia de primera instancia en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda.

Sendy Daney Villa Arango, a través de apoderado judicial, presentó demanda para promover Proceso Verbal con pretensión de declaración de responsabilidad civil contractual contra Oscar Alonso Ramírez Sierra, Rafael Fernando Gil Sierra y Daniela Ramírez Castaño.

Pidió que se declare que entre las partes existió un mandato civil oneroso, o el que resulte probado en el proceso. Que en el

mismo ella fue mandante, y los demandados, sus mandatarios. Que su objeto fue adelantar un proceso ejecutivo contra Ángela María Restrepo Martínez, Juan Pablo Garcés Restrepo y BIOTEL S.A.S.

Adicionalmente, que se les declare solidariamente responsables de los daños a ella irrogados por la falta de diligencia con la cual se adelantó el proceso encomendado y que se les condene a pagarle (\$133.034.000) por lucro cesante y 50 SMLMV por daño moral.

En sustento de esas pretensiones adujo, en lo relevante, que el 08-10-2015 otorgó poder de representación judicial, con el fin ya aludido, al profesional del Derecho Daniel Céspedes Luna, quien más tarde informó que no podía hacerse cargo de la gestión, de ahí que su esposa recomendó al establecimiento de comercio Boletines, estados judiciales, informática y tecnología para que la llevara a cabo.

Rafael Fernando Gil Sierra se presentó como socio, con amplia experiencia en el área civil y cobros ejecutivos. En el nombrado establecimiento aceptaron seguir el proceso. El 17-08-2016 se entregaron los documentos necesarios para ese efecto y se advirtió que el pagaré prescribía el 21-08-2016. Acordaron que el pago sería del 20% de la suma recaudada.

El 18-08-2016, Daniel Céspedes Luna, sustituyó el poder a Rafael Fernando Gil Sierra, quien garantizó que el proceso saldría avante, recuperaría todo el dinero y la demanda estaría radicada, en Medellín, el 19-08-2016.

A pesar de la advertencia sobre el término de prescripción, la demanda fue presentada el 22-08-2016. Su conocimiento correspondió el Juzgado 15 Civil Municipal de la nombrada ciudad.

Ese Despacho requirió al demandado, en numerosas ocasiones para que notificara a los ejecutados. El mandamiento de pago se notificó por estado el 11-10-2016. La parte pasiva se notificó así: Ángela María Restrepo: 13-12-2017, BIOTEL S.A.S. 15-12-2017 y Juan Pablo Garcés Restrepo: 16-07-2018.

Comoquiera que transcurrió más de un año desde la presentación de la demanda hasta la notificación de los demandados, no se interrumpió el término de prescripción por la conducta culposa del profesional.

El 02-04-2019 se dictó sentencia anticipada acogiendo la excepción de prescripción de la acción cambiaria. Decisión confirmada con fallo de segundo grado el 15-08-2019 por el

Juzgado 9° Civil del Circuito de la ya nombrada ciudad, porque no hubo interrupción de la prescripción.

Por culpa de los demandados, la demandante perdió la oportunidad de recuperar la suma ahora que reclama como lucro cesante.

2. Oposición

Oscar Alonso Ramírez Sierra y Daniela Ramírez Castaño, contestaron la demanda a través de apoderado común. Se opusieron a las pretensiones. Adujeron que no existió contrato alguno entre ellos y la demandante. Objetaron el juramento estimatorio.

Propusieron la excepción de mérito que denominaron “falta de legitimación en la causa por pasiva”. Señalaron que no les constan los hechos 1°, 2°, 5°, 15°, 16°, 18°, 20° a 26°, 28° y 34°. Que no son ciertos el 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14°, 17°. Aceptó los hechos 3°, 10°, 11 (parcialmente), 13, sobre los demás dijeron que son apreciaciones subjetivas.

Rafael Fernando Gil Sierra, contestó la demanda en nombre propio. Se opuso a las pretensiones. Propuso las excepciones de

mérito que denominó “*inexistencia de culpa*” y “*inexistencia de los elementos de la pérdida de oportunidad*”.

II. CONSIDERACIONES.

1. SOBRE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES.

1.1. Competencia. Corresponde a este Despacho porque el domicilio de los demandados es la ciudad de Armenia Quindío y porque las pretensiones exceden el equivalente a 150 SMLMV (Art. 28.1° y 20.1° CGP).

1.2. Capacidad sustantiva y procesal. Le asiste a quienes ocupan ambos extremos del litigio, como personas naturales mayores (Art. 53.1° CGP), prevalidas de la presunción de capacidad prevista en el artículo 1503 C.C.

1.3. Demanda en forma. Como quedó reseñado en los antecedentes, la parte actora pidió que se declarara que hubo un contrato de mandato oneroso con los demandados o el que resulte probado. En subsidio, que hubo un contrato laboral.

De esa forma quedaron acumuladas pretensiones que no siguen el mismo trámite, ni son competencia del mismo juez, contraviniendo el artículo 88 Núm. 1° y 3° del CGP, en concordancia con los artículos 1° y 74 del CPL.

Circunstancia que impide proveer de mérito sobre la pretensión subsidiaria en caso de que no prospere la principal.

2. SOBRE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

La relación que entablan los profesionales del derecho con sus clientes, puede ser directa, en cuyo caso surge entre ellos un vínculo contractual, que puede calificarse, en general como de prestación de servicios -arrendamiento de servicios- (sin pasar por alto que hay quienes lo definen como contrato de obra, mandato, contrato de gestión (mediación, agencia, comisión), innominado o atípico).

También puede ocurrir, que el abogado preste sus servicios, ya no de forma directa, sino por cuenta ajena: i) sujeto a una relación laboral común, como abogado de empresa, ii) a través de una relación laboral especial, como integrante de un despacho (individual o colectivo), o iii) en régimen de derecho administrativo, como abogado de la administración pública. De

igual forma, puede ejercer en grupo la profesión, a través de una sociedad profesional u otra forma de colaboración.

En este caso, está acreditado que Sendy Daney Villa Arango otorgó poder de representación judicial al profesional Daniel Céspedes Luna el 08-10-2015 para tramitar proceso ejecutivo contra Ángela María Restrepo Martínez y Juan Pablo Garcés Restrepo (fl 15 C1) y que el mismo fue sustituido al abogado Rafel Fernando Gil Sierra el 18-08-2016, quien, en esa misma fecha la aceptó expresamente.

De ese modo surgió un vínculo contractual entre la ya nombrada Sendy Daney Villa Arango y Rafael Fernando Gil Sierra, en virtud del cual la primera está legitimada pedir que se resarzan los perjuicios derivados de su presunto incumplimiento y el segundo para resistir esa pretensión.

Lo contrario ocurre con Oscar Alonso Ramírez Sierra y Daniela Ramírez Castaño, pues no se demostró que hubiesen celebrado contrato alguno con la demandante.

La recepción de los documentos necesario para la gestión por el primero no es indicativa de la existencia de dicho contrato y tampoco lo es que las contestaciones de la demanda sean similares.

Esos hechos, aunque revelan cierta cercanía entre los demandados, no evidencian que hubiesen asumido la representación de la demandada en forma conjunta, porque bien pueden obedecer a cualquier otra circunstancia.

Es cierto que pueden deducirse indicios de la conducta procesal de las partes, como reclamó el mandatario de la parte actora, en este caso, de la similitud de las contestaciones presentadas por los demandados.

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 242 del CGP, los indicios deben apreciarse en conjunto, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con las demás pruebas del proceso. Todo lo cual se echa de menos en este caso.

Por otra parte, tampoco hubo confesión. Para ese propósito es necesario que la misma sea expresa, consciente y libre, al tenor del artículo 191.4 del CGP. Además, debe aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado.

De modo que no puede tomarse un fragmento descontextualizado de la contestación como fundamento

suficiente para inferir una confesión, más aún cuando la oposición se basa justamente en que Oscar Alonso Ramírez Sierra y Daniela Ramírez Castaño no celebraron el contrato invocado como fuente de la responsabilidad.

Las alusiones al establecimiento de comercio Boletines, estados judiciales, informática y tecnología tampoco dan lugar a que se les tenga como mandatarios de la demandante.

Según las previsiones del Art. 515 del C.Co, es un conjunto de bienes organizados para los fines de la empresa. De modo que su existencia no es sugestiva de una sociedad, formal o, de hecho, entre los demandados, ni de otra modalidad de colaboración para el ejercicio conjunto del litigio.

En cualquier caso, si se aceptara que hubo un vínculo contractual con todos los demandados, de ahí tampoco emerge la obligación solidaria de resarcimiento que invoca la parte actora.

Y es así porque, en materia civil, frente a la pluralidad de deudores impera la regla de la mancomunidad y solo excepcionalmente, por mandato expreso de la ley o convención de las partes, la de la solidaridad.

En ese orden, cada contratista está llamado a responder solo por el incumplimiento que pueda atribuirse a su propia negligencia y, en este caso, no se alegó siquiera y menos se probó que Oscar Alonso Ramírez Sierra y Daniela Ramírez Castaño hubiesen incurrido en alguna.

3. SOBRE LOS PRESUPUESTOS SUSTANCIALES.

3.1. Enunciación.

Son elementos de la responsabilidad civil contractual, modalidad invocada en la demanda: a) la existencia de un contrato válido, b) el incumplimiento imputable al deudor contractual, c) el daño y d) la relación de causalidad entre los dos últimos. (CSJ SCC Sent. SC7220-2015 del 09-06-2015).

3.2. Obligaciones de quienes ejercen profesionalmente el derecho.

En principio, son de medios, no de resultados, salvo contadas excepciones, como la elaboración de dictámenes, contratos, constitución de sociedades, estatutos o reglamentos,

que dependen exclusivamente de la voluntad del profesional y cuando se garantiza la obtención de un resultado.

De ahí que su régimen de responsabilidad es subjetivo y corresponde al demandante probar que incurrió en alguna culpa. Sobre lo cual ha expresado la doctrina:

¹“(...) la exigencia de responsabilidad civil a estos profesionales pasa necesariamente por examinar si su conducta se ajustó a los parámetros exigibles según su lex artis. (...)”

De otra parte, no cabe olvidar que la ciencia del derecho, cuyo conocimiento y aplicación constituye la base de la actividad de estos profesionales, no es una ciencia exacta, como las naturales, sobre la que se puede partir de premisas ciertas e indubitadas para llegar a conclusiones igual de ciertas e indubitadas.

De ahí que no quepa afirmar, con carácter general, que el resultado desfavorable de un litigio es imputable a la conducta negligente del abogado o del procurador”.

---

¹El trabajo profesional de los abogados. Ángel Belasco Pallicer, Adela Serra Rodríguez. 2012.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31012.pdf>.

En este orden de ideas, el marco jurídico que encuadra la relación de servicios profesionales del abogado con su cliente está determinado por las normas propias del tipo contractual (arrendamiento de servicios inmateriales Art. 2063 C.C.), las del Código Civil sobre obligaciones y contratos en general, el estatuto de la abogacía (Dto. 196/71), analógicamente, algunas propias del contrato de mandato.

La última de las citadas disposiciones prevé, en su artículo 47.6° que es deber del abogado atender con celosa diligencia sus encargos profesionales.

Y, en su artículo 55.1° dispone que incurre en falta contra la debida diligencia profesional el abogado que injustificadamente demore la iniciación o prosecución de la gestión que le ha sido encomendada o deje de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional.

Por otra parte, el artículo 2056 del C.C. aplicable al contrato de arrendamiento de servicios inmateriales por remisión del artículo 2063 del C.C, establece que hay lugar a reclamar perjuicios, según las reglas generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido, o se haya retardado la ejecución.

De modo que puede afirmarse que el profesional del derecho tiene la obligación de adelantar con diligencia y prontitud la gestión que le es encomendada y responde por los perjuicios que se deriven de la inejecución o del retardo.

4. SOBRE LAS PRUEBAS RECAUDADAS.

Las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso ejecutivo seguido por Sendy Daney Villa Arango contra Ángela María Restrepo Martínez, Juan Pablo Garcés Restrepo y BIOTEL S.A.S. dan cuenta de la prosperidad de la excepción de prescripción extintiva.

Con lo cual, quedó acreditado que aquella perdió la oportunidad de recaudar la suma perseguida a través del cobro ejecutivo emprendido. Sobre los perjuicios que de allí se deriven hay lugar a pronunciarse solo en caso de hallarse configurada la responsabilidad invocada.

Como quedó acotado líneas atrás, está demostrada la celebración de un contrato entre Sendy Daney Villa Arango, únicamente con Rafael Fernando Sierra, no con Oscar Ramírez Sierra ni con Daniela Ramírez Castaño.

A través de las ya referidas providencias también quedó demostrado que la demanda encomendada al profesional se presentó luego de expirado el término de la prescripción extintiva.

Sin embargo, el poder fue otorgado al mandatario principal por Sendy Daney Villa Arango el 08-10-2015 y este solo lo sustituyó a Rafael Fernando Sierra el 18-08-2016, es decir, diez meses y diez días después, a solo dos días de que se cumpliera el término de prescripción y tratándose de una demanda que debía presentarse en la ciudad de Medellín Ant.

De ése modo la poderdante y su mandatario principal asumieron el riesgo al delegar la gestión “*in extremis*” a punto de fenecer el plazo para llevarla a cabo.

Por otra parte, el término extintivo se cumplía un día inhábil, con lo cual, el mandatario estimó, con apoyo en el artículo 118 del CGP, y en algunos pronunciamientos con valor de doctrina, que la demanda podía presentarse el día hábil siguiente.

Sobre el particular se ha dicho que ²“(…) asunto diferente es el vencimiento de un término que obviamente si ocurre en un día inhábil, debe extenderse al día hábil siguiente. Las leyes procesales, como el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil

---

² CE Secc1, Auto del 31 de agosto de 2015. Exp. 2015-00155-01. CP. Carmen Teresa Ortiz.

o el mencionado artículo 118 del Código General del Proceso o el vigente artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 o Código de Régimen Política y Municipal, permiten que, en tratándose de términos dados en meses o años, que son calendario, cuando éstos finalizan en un día inhábil, se extiendan al día hábil siguiente”

Criterio reiterado en materia contencioso administrativa, como puede verse en las providencias del 01-06-2017 CE SCA 3 Exp. 13001-23-33-000-2016-00008-01; 08-10-2020 CE 1 Exp. 25000-23-41-000-2018-00923-01; 19-04-2021, CE 1 Exp. 25000-23-41-000-2019-00802-01; 28-01-2021 CE 1 Exp. 11001-03-15-000-2020-03737-01; 30-08-2016 CE 4 Exp. 05001-23-31-000-2011-01829-01.

También lo ha estimado así la CSJ SC, Sent. STC917-2020, Auto del 06-11-2019 Exp. 11001-02-03-000-2017-00079-00; Sent. STC6030-2021.

En este orden de ideas, al margen de que se comparta o no dicha tesis, lo cierto es que la misma entraña una comprensión plausible de la norma. Adicionalmente, recuérdese que el poder fue sustituido el 18-08-2016, es decir, a solo tres días de que operara la prescripción y la demanda debía presentarse en la ciudad de Medellín Ant.

De modo que, frente a semejante panorama, la presentación el día hábil siguiente al vencimiento del término no revela una conducta negligente o descuidada del mandatario.

Por otra parte, el a-quo estimó que la prescripción extintiva se consolidó antes de la prestación de la demanda, con lo cual, la presunta demora para notificar a los ejecutados no tiene relación causal con el daño alegado.

De cualquier manera, vista la actuación, tampoco se aprecia que el mandatario hubiese sido indolente o descuidado en la labor de notificación a los demandados.

En primer lugar, es razonable que antes de notificar a los ejecutados se procure perfeccionar las medidas cautelares. En ésta línea el profesional pidió el embargo del derecho de cuota de Ángela María Restrepo Martínez el 28-10-2016, dos meses y seis días después de presentar la demanda. (22-08-2016).

La medida se decretó cinco días después, el 02-11-2016 y se registró dieciséis días más tarde, el 18-11-2016, un mes y veintinueve días después se decretó el secuestro y se libró el exhorto para materializarlo. A partir de entonces, el mandatario tardó un mes y veintisiete días para presentar la citación de

Ángela María Restrepo Martínez. (14-03-2017) y cinco días después presentó la de Juan Pablo Garcés Restrepo y el 17-03-2017 informó una nueva dirección para enterar a Ángela María Restrepo. Aceptada esa citación (29-03-2017), en cinco días se llevó a cabo el aviso (04-04-2017).

En este punto sobreviene un hecho que marca el curso de los acontecimientos siguientes. El apoderado pide el emplazamiento de BIOTEL S.A.S. el 04-04-2017, es decir, dentro del año siguiente a la notificación por estado del mandamiento de pago, tiempo hábil para interrumpir la prescripción, sin embargo, el juzgado solo se pronuncia el 23-10-2017, seis meses y diecinueve días después, ya fenecida esa anualidad.

Lo anterior resulta trascendente si se considera que el término previsto en el artículo 90 del CPG y ahora en el 94 del CGP, es subjetivo, de modo que no puede extinguirse el derecho cuando la tardanza ocurre por causas no atribuibles a quien demanda.

En esa línea se ha pronunciado el Tribunal de cierre de la especialidad indicando: *“(...) si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de éstos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no*

sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda, tiene la virtud de impedir que opere la caducidad (...)” STC14529-2018. Criterio también expuesto en las Sent. SC5755-2014, STC1688-2015, STC8815-2015, STC6500-2018, STC7933-2018, La C.C. en la Sent. C-227/09.

En ese orden de ideas, no basta computar objetivamente el trascurso de un año, a partir de la notificación por estado del mandamiento pago para hacer inoperante, automáticamente, la interrupción de la prescripción sino se logra la notificación personal a los ejecutados.

Todo lo contrario, debe evaluarse la gestión desplegada en aras de alcanzar esa finalidad para establecer si su fracaso obedece o no a causas imputables al demandante, como evidentemente no aconteció en este caso.

Corolario de lo expuesto, se concluye que no está acreditado el incumplimiento imputable al profesional, a título de culpa, elemento imprescindible para la prosperidad de la pretensión.

II. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia Quindío, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DESESTIMAR las pretensiones de la demanda presentada por Sendy Daney Villa Arango, a través de apoderado judicial, contra Oscar Ramírez Sierra, Rafael Fernando Sierra y Daniela Ramírez Castaño.

SEGUNDO. LEVANTAR la inscripción de la demanda sobre los inmuebles distinguidos con las matrículas inmobiliarias 280-212032 y 282-34208, comunicadas mediante oficios 0691 y SN del 06-08-2021 y del 13-05-2021. Líbrense las comunicaciones correspondientes por secretaría.

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante a favor de la demandada. Inclúyase en su liquidación la suma de (\$8.650.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese,

IVÁN DARÍO LÓPEZ GUZMÁN
JUEZ

Estado # 49 del 06-04-2022

Firmado Por:

Ivan Dario Lopez Guzman
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 003
Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dc7bf13ebbd63808363bbd3e39619043c17b1ed3be6f3afeb092c36e428eea7c**

Documento generado en 04/04/2022 09:48:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>